



OPINIÓN

Mineduc: del cambio de paradigma al realismo

■ La evaluación de la cartera muestra que la gestión comenzó con una agenda muy ambiciosa y terminó centrada en las urgencias semanales. ¿Lección? En educación, las reformas no se alcanzan con declaraciones ambiciosas, sino con diagnósticos precisos, programas específicos y bien secuenciados.

JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER

Con el fin del mandato del Presidente Boric acercándose, la evaluación del desempeño del Gobierno en el sector educativo debe abarcar tanto los discursos de política sectorial como su impacto en las trayectorias escolares, los avances en el aprendizaje y la estructura institucional del sistema en general.

El comienzo del mandato del Ministerio fue claro. Marco Antonio Ávila, el ministro del primer período, expresó desde el inicio que su objetivo era impulsar un cambio de paradigma profundo y, para ello, propuso una hoja de ruta 2022-2026 con once ejes principales. ¿Todo o nada?

Esta agenda buscaba revolucionar la educación en Chile a través de una revitalización educativa integral, reforzando el sistema público, incluyendo el currículo, la formación del profesorado, además de modificar el financiamiento y el acceso a la educación superior. Todos los niveles educativos, la profesión docente y la evaluación de procesos y resultados serían objeto de reformas sustanciales.

El problema con esta visión no fue que abordase temas equivocados, sino que los presentaba como si pudieran resolverse en un solo paquete, sin una secuencia ni una jerarquía claras.

En política pública, ese enfoque ambicioso y declamatorio suele dispersar la capacidad técnico-administrativa del ministerio y generar conflictos en múltiples frentes, sin que ello conduzca a mejoras significativas en los aspectos realmente importantes: lo

que sucede en el interior del aula.

La teoría del cambio en ese enfoque ministerial cometía un error frecuente: asumir que el sistema puede ser reorganizado desde el centro según su voluntad en un período corto de cuatro años. Sin embargo, la evidencia y la experiencia muestran que la educación es un sistema complejo y conectado, que involucra diversos intereses, valores, agencias y actores.

Modificar una parte impacta en las demás, por lo que se necesitan metas coherentes, prioridades definidas y una alta capacidad de coordinación.

La OCDE indica que las reformas fracasan si no consideran los procesos de implementación, si sobreestiman la capacidad de las instituciones y si no involucran a actores clave. En Chile, estos riesgos aumentaron por el contexto: la crisis posterior a la pandemia agudizó las brechas en el aprendizaje, redujo la asistencia escolar, afectó la profesión docente y las familias exigieron más acogida, protección y cuidado; sin propuestas refundacionales ni cambios doctrinales.

Se puede decir que el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 fue un aterrizaje abrupto. El rechazo del 62% a la propuesta de la Convención Constitucional fue un golpe político para Boric y su gabinete. Aunque no explica todo, ayuda a entender la reducción de la agenda del Gobierno. Incluso el Ministerio de Educación pasó de prometer un cambio profundo y refundacional a realizar acciones acotadas, como mejorar la asistencia, la reintegración, la convivencia y la infraestructura.

El cambio en la conducción ministerial de agosto de 2023 reafirmó esa dirección. Al tomar el cargo, Nicolás Cataldo, nuevo secretario de Estado, manifestó su deseo de que la educación “no se convierta en una trinchera” y presentó una lista de prioridades. En el ámbito operativo, el Plan de Reactivación Educativa 2023 formalizó la respuesta en tres áreas —convivencia y salud mental; aprendizajes; asistencia y revinculación— y estimó un presupuesto anual de aproximadamente \$250 mil millones.

Se observaron mejoras en la asistencia a las escuelas, un aspecto clave. El Centro de Estudios del Ministerio informó que la asistencia media anual creció del 83,5% en 2022 al 86,5% en 2024, mientras que la inasistencia grave o crítica disminuyó del 37,5% en 2022 al 27,7% en 2024. En educación parvularia, la asistencia promedio anual pasó del 62% en 2022 al 76% en 2024.

Los resultados en aprendizajes son diversos. La Agencia de Calidad de la Educación informó que en el Simce 2024, hubo mejoras en Lectura y Matemática en 4° básico, pero una disminución en Matemática en 6° básico. En 2° medio, no se observaron avances.

Aunque hay indicios de recuperación, los resultados siguen siendo insatisfactorios y desiguales, lo que demuestra una fragilidad en los logros a medida que los estudiantes avanzan en su educación.

Este tema se discute poco, a pesar de ser una paradoja: a mayor escolarización, parecen disminuir las habilidades para tareas cognitivas básicas.



“El problema con esta visión no fue que abordase temas equivocados, sino que los presentaba como si pudieran resolverse en un solo paquete, sin una secuencia ni una jerarquía claras.”

En la educación pública, la crisis en la gestión local y las fallas en los trasposos de colegios llevaron a frenar el proceso sin paralizarlo. El Gobierno ajustó el calendario de implementación de los nuevos Servicios Locales, extendiendo los plazos y posponiendo algunas recepciones.

Finalmente, la autoridad admitió que era necesario modificar el marco legislativo de los SLEP. En varios de estos servicios ya creados han surgido problemas graves relacionados con la conducción, la gestión, el personal y la infraestructura.

El logro principal de esta etapa legislativa fue abordar, de manera retrospectiva, la “deuda histórica” de los docentes, un problema que persistía sin solución.

Sin embargo, dos proyectos emblemáticos siguen pendientes: la sala cuna universal y un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior (FES), que sustituya al CAE. Su trámite, a veces lento y otras rígido, dificultó la construcción de los consensos necesarios. Esto obliga al próximo gobierno a responsabilizarse de ambas cuestiones.

Un aspecto adicional relacionado con la comunicación: en la campaña oficial para el cierre —Más de 1.000 Avances (sic)—, la breve lista de “avances históricos” no incluye la educación; se enfoca en pensiones, seguridad, salud y empleo. La realidad es que la educación nunca estuvo entre las prioridades de este gobierno.

En resumen, la evaluación de la cartera muestra que la gestión comenzó con una agenda muy ambiciosa y terminó centrada en las urgencias semanales.

¿Lección? En educación, las reformas no se alcanzan con declaraciones ambiciosas, sino con diagnósticos precisos, programas específicos y bien secuenciados, recursos adecuados y, sobre todo, una capacidad sólida para implementar y evaluar los resultados con rigor. Lo demás solo genera falsas expectativas.